



REFLEXIONES SOBRE DESIGUALDAD SOCIAL Y MEMORIA HISTÓRICA EN CHILE

Francisco E. Sanhueza San Martín¹. fcoessm@gmail.com

Resumen: El artículo argumenta que durante la conmemoración de los treinta años del golpe militar, se realiza un ejercicio de memoria histórica por parte de distintos colectivos y grupos humanos que resignifican nuestro pasado reciente. Las múltiples actividades de reminiscencias colectivas promovieron la reflexividad y la memoria sobre lo que somos y lo que fuimos, lo que hemos hecho y lo que hicimos como país. En un contexto de desigualdad social, crisis de la sociedad de mercado y excesiva autorreferencialidad de la clase política, y al margen del discurso oficial, se desnudaron nuestros antagonismos y contradicciones evidenciando que las políticas del consenso y la precaria legitimidad de la institucionalidad heredada, más la escandalosa desigualdad e injusticia social, no nos permiten como colectivo proyectarnos hacia el futuro sin que aparezca el fantasma de la fractura y la violencia. Estos elementos estimularon la movilización de actores críticos del orden político y económico existente.

Palabras clave: Desigualdad – neoliberalismo - memoria histórica - movilización social y política.

¹ Sociólogo de la Universidad Arturo Prat, Estudiante de Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado.

I. INTRODUCCIÓN

Vivimos una época de balances. La proximidad del bicentenario de la República nos obliga a (re)pensar lo que somos y lo hemos sido; nuestros mitos e invenciones, así como nuestros anhelos y la realidad de nuestras proyecciones. Respecto de nuestra historia reciente, diferentes actores críticos² han comenzado a destrabar el tabú sobre la crítica de los cambios ocurridos en nuestra sociedad durante los últimos treinta y cinco años².

En efecto, al cumplirse treinta años del golpe militar, múltiples actores realizaron un ejercicio de memoria histórica que, como un espejo, devolvió la imagen de un país que reconociendo su refundación traumática, intenta reconocerse en sus transformaciones y persistencias.

Nadie afirma que la sociedad chilena actual es la misma que la de hace tres décadas. En términos históricos, el golpe militar de 1973 no sólo marca un punto de inflexión por la imposición de un modelo económico neoliberal y una Constitución Política autoritaria, sino que engendra una sociedad de mercado; es decir, una sociedad con normas, actitudes y expectativas de acuerdo al mercado, donde la propensión a la mercantilización moldea la sociabilidad, la vida social se recoge a la vida privada, y la ideología individualista rompe con la tradición comunitaria (Lechner, 1996) para instalar al empresario como el sujeto portador de la modernidad (Salazar y Pinto, 1999).

Estas transformaciones económicas, políticas y socioculturales impuestas por el régimen militar, provocó la resistencia de sectores populares y fuerzas políticas opositoras al régimen que sobre la base de su ilegitimidad se activa la movilización social y política por la redemocratización del país.

El triunfo de esta lucha da paso a la transición a la democracia que con sus promesas

² A partir de coyunturas que permiten una evaluación retrospectiva de lo hecho por razones de ética histórica (Salazar, 1999), el artículo se escribe desde una de las tantas memorias que pueblan Chile; no se buscan respuestas unívocas sobre la pregunta acerca de nuestra historia sino que tomar parte de la “batalla de la memoria” (Illanes, 2002).

de igualdad y recomposición social –o al menos recuperación de lo perdido bajo la dictadura-, impulsa la desactivación de los movimientos y organizaciones sociales que respaldaron la acción de los partidos. Sin embargo, la promesa fue progresivamente descascarándose frente al paso del tiempo para mostrar que el proceso de “transición a la democracia” no ha sido otra cosa que la reconstrucción de la política partidaria bajo la hegemonía del sistema económico neoliberal y la institucionalidad política heredada. El intento por destruir a punta de balas el imaginario progresista de un sector político del país parecía haber alcanzado sus objetivos. Parecía que a mediados de los noventa habíamos llegado a *nuestro* fin de la historia.

Pero no todo estaba olvidado ni había desaparecido. A treinta años del golpe militar se reactiva la memoria histórica como movimiento telúrico sobre la inercia de lo cotidiano y que resultó en la crítica del presente instalado por los vencedores de 1973, abriéndose paso entre la crítica de los *escépticos de sentido* y su “*(cansada) aceptación de la derrota, y la adaptación, por mera inercia, al sistema vencedor*” (Salazar, 2006, p.9) y la crítica de los *renovados*, es decir, de aquellos que “*privilegian la gobernabilidad del sistema sobre la participación popular; la paz y los equilibrios del presente más que el devenir histórico; la competitividad más que la soberanía popular*” (Salazar, 2006, p.11).

En efecto, la modernización del país impulsada por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia ha sido exitosa en la consolidación del régimen político formal y el crecimiento económico en el marco de una economía exportadora; sin embargo, como las caras de Jano, lo construido atenta sobre sí mismo producto de la oligarquización y acentuada autorreferencialidad del sistema político imperante y la escandalosa desigualdad económica y social cuestiones inherentes a las “*transformaciones estructurales y culturales que han debilitado los lazos políticos y estatales de la sociedad*” (Garretón, 2004, p.3) .

Sin embargo, se observan incipientes procesos de recomposición de la capacidad de los sectores populares para organizar la acción colectiva en función de reivindicaciones por

mejoras en sus condiciones de existencia, un proceso que como afirma este artículo, coincide con una revitalización de la memoria histórica sobre la política emancipadora en general y el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular en particular. A continuación se argumenta que, si hasta 1998 los preceptos económicos tienen una preeminencia sobre la sociedad, a partir del 2003, comienza un proceso de reconstrucción de los movimientos sociales que vienen a aponer en entredicho la hegemonía de lo económico sobre lo social.

II. LA LUCHA POR LA DEMOCRACIA Y LA GESTACIÓN DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA: DE LA *REBELIÓN* A LA *NEGOCIACIÓN*.

La crisis económica de 1981-1982 y los efectos de las políticas de ajuste estructural impulsadas por los economistas neoliberales del régimen militar –el desempleo alcanzaba el 28%–, actuaban como telón de fondo para que en 1983 sindicalistas y pobladores organizaran las primeras protestas populares callejeras contra el régimen. Ciertamente, la capacidad de manifestar el descontento mediante acciones de lucha social y callejera como el paro y la barricada se sucede a partir de la recomposición de las redes solidarias como los comedores populares y los comités de vivienda; sin embargo, a pesar de sus expresiones organizativas la movilización expresa un *“alto grado de violencia mientras es incapaz de definir un proyecto alternativo propio, global y coherente”* (Guillaudat y Mouterde, 1998, p.152).

Hacia 1984 y 1985 los movimientos sociales comienzan a ser desplazados por la reaparición en escena de los partidos políticos. De acuerdo con Guillaudat y Mouterde (1998), esto sucedió en gran medida por la multidimensionalidad del movimiento opositor, las diferencias de objetivos y el desgaste de los movimientos sindicales producto de la represión. Efectivamente, si el primer y segundo llamado a protesta nacional había sido liderado por el movimiento sindical, la tercera convocatoria es iniciativa de la Democracia Cristiana, no sin antes generar una polémica con los partidos de izquierda –en particular con el Partido Comunista– por considerar éstos que las consignas no representan al conjunto de las fuerzas de oposición, cuestión que denota las diferencias de estrategias y tácticas que tensionaron a los actores opositores para determinar la salida de la dictadura que vivía la

sociedad chilena. Entre 1985-1987 las tácticas emprendidas para la derrota de la dictadura con base en los movimientos sociales, tanto el llamado a todas las formas de lucha hecha por el Movimiento Democrático Popular como el emplazamiento de la movilización social sin lucha armada desde la Alianza Democrática, comienzan a tornarse incómodas para los partidos políticos.

Hasta este momento las bases partidarias “*se plegaron como aliadas a la lucha promovida por la base ciudadana, y colaboraron con la reconstrucción civil de la política*” (Salazar y Pinto, 1999, p.259); sin embargo, a partir del protagonismo de los partidos políticos y sus liderazgos en el tercer llamado a protesta nacional, éstos comienzan progresivamente a cortar lazos con los movimientos sociales. Luego del relativo fracaso de la protesta de septiembre de 1986 y el intento de tiranicidio del FPMR en 1987, el énfasis de la acción de los partidos cambia y la estrategia de *rebelión* comienza a ser sustituida por la *negociación*; es decir, si el régimen se entendía a partir de una lucha a muerte, ahora, era sujeto de diálogo para el juego democrático electoral.

El proceso de desafección de la clase política respecto de los movimientos sociales sucede durante el periodo 1984-1994 (Salazar 1999) y coincide con las negociaciones realizadas por la oposición a la dictadura militar con militares y políticos de derecha entre 1987 y 1988 que significaron la “*aceptación de los partidos democráticos del calendario político y del marco institucional definido por las autoridades militares para restaurar el sistema democrático*” (Goicovic, 1996, p.12) -mientras que la dictadura de Pinochet se ve obligada a aceptar su derrota en el Plebiscito de 1988-.

Esta trayectoria política denota el giro de orientación de los partidos políticos desde los movimientos sociales hacia el Estado con fines de cambio y reorganización de la sociedad, cuestiones que se plasman en discursos de intelectuales como Eugenio Tironi (1990) y Norbert Lechner (1990). Los movimientos sociales populares por un lado se encontraban desgastados, pero por otro, habían sufrido la marginación de la gestión de la sociedad por ser considerados elementos indeseables para la *gobernabilidad* del país por parte de los protagonistas de las negociaciones para la salida democrática de la dictadura.

Pero la aquiescencia no sólo se refiere a lo político y terminó abarcando la garantía de “*continuidad del modelo económico neoliberal, por cuanto se impuso con amplio consenso (desde los socialistas hasta la derecha más conservadora) que éste había sido exitoso y que no era la disposición de ningún sector político racional restaurar el ineficiente Estado de Bienestar de los años setenta*” (Goicovic, 1996, p.12). Si el régimen militar impulsó la apertura económica al exterior, liberalizó la economía y privatizó empresas publicas (Valenzuela, 1998), con la llegada de la democracia en 1990 ocurre una reafirmación del modelo económico existente con la diferencia que se instala una política social con énfasis en la reducción de la pobreza y la protección de los más pobres, cuestiones que otorgan legitimidad política al modelo económico (Solimano y Pollack, 2006).

III. CRECIMIENTO ECONÓMICO, POBREZA Y DESIGUALDAD EN CHILE

En este sentido, en el periodo de 1990 a 1997 se observa una correlación entre crecimiento económico y disminución de la pobreza (Solimano y Pollack, 2006). Aún más, de acuerdo a las cifras de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) la población en condición de pobreza baja de un 38,6% en 1990 a un 18,8% en 2003 y a un 13,7% el 2006. Sin embargo, cabe señalar un alcance. La medición de la pobreza se realiza mediante el método de la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas³ que se corresponde con los patrones de consumo de 1987, lo que no considera las transformaciones sociales y económicas sucedidas en los últimos lustros en el país. De acuerdo a esta consideración, Larraín (2008) realiza una revisión de los cálculos y determina que hacia 2006 la pobreza afectaba a un 29% de la población, más del doble de lo estimado para ese año (13,7%), conclusiones similares a las que llega Schatan (2003).

Innegable son las cifras de crecimiento económico en Chile, donde la tasa de crecimiento anual constituye en promedio un 5,6% por año para el periodo 1990-2005, a

³ Su base es una canasta mínima de alimentación y un factor multiplicador que entrega el costo total de satisfacer las necesidades mínimas alimentarias y no alimentarias. El valor resultante se compara con el ingreso familiar (Larraín, 2008)

diferencia del 4,1% para el periodo 1960-2005. Sin embargo, bajo el modelo económico chileno en democracia persiste la desigualdad de ingreso y riqueza que ha generado una alta estratificación social. En efecto, los objetivos de la política social se han dirigido a la reducción de la pobreza por medio del crecimiento económico y criterios de focalización de las transferencias monetarias, gasto en salud, vivienda y otros sectores sociales, y reformas en el sistema de provisión privada de servicios sociales, Ley de Isapres, Plan Auge y el aumento en el acceso a la educación primaria, sin que ello haya afectado la distribución de las riquezas e ingresos (Solimano y Pollack, 2006).

Esto se explica a partir de que la política pública no fue diseñada para transformar la estructura de recursos, riquezas e ingresos de las personas producto de la concentración de la propiedad, el grado de concentración de la estructura productiva y el estado de las organizaciones sociales y de otros grupos no beneficiados. El énfasis de las políticas macroeconómicas y sociales, se dirigen a acelerar del crecimiento económico, la baja de la inflación, la solvencia fiscal y externa, y la modernización de sectores y actividades productivas⁴, y no ha modificar la regresiva estructura distributiva existente en el país (Schatan, 2003).

Con la llamada “crisis asiática” sucede un punto de inflexión en la economía chilena. Si con Aylwin y Frei las políticas macroeconómicas se caracterizaron por un gradualismo en su aplicación, la inexistencia de una regla fiscal explícita y la restricción a las entradas de capitales externos de corto plazo, con Lagos se observa un giro hacia políticas más ortodoxas. En efecto, se sostiene un sistema de flotación cambiaria con mínima intervención, la instauración de la regla de superávit fiscal del 1% y el retiro de controles a los movimientos de capitales a corto plazo. Frente a la crisis asiática, la presidencia de Ricardo Lagos realiza un “tratamiento de choque monetario” mediante un aumento de la tasa de interés, cuestión que condujo necesariamente a una reducción del gasto interno y el aumento del costo de servicios de la deuda, lo que afectó principalmente a las pymes y mypes –endeudadas y con una demanda interna deprimida- (Solimano y

⁴ un importante papel lo juega el Banco Central, pero no en el sentido de objetivos de nivel de producto y pleno empleo (Solimano y Pollack, 2006).

Pollack, 2006), las que si bien corresponden a un sector de baja productividad en comparación con la gran empresa proveen cerca de un 80% del empleo.

En este contexto es que toma fuerza el debate sobre crecimiento y equidad. El tema de la desigualdad social ya no puede seguir siendo invisibilizado. Siguiendo a Solimano y Pollack (2006), las razones que explicarían la ausencia del tema de la desigualdad en la agenda de las políticas públicas de Chile radican, primero, en el delicado equilibrio político de los noventa entre actores salientes del Régimen Militar y nuevos actores políticos; y segundo, en la memoria social que asociaba la redistribución con los conflictos sociales en los setenta, ambos elementos que contribuyeron a dejarlo fuera de la discusión de la agenda pública. Sin embargo, hacia el año 2003 la discusión comienza a ser persistente y preocupante: Chile se encuentra entre las doce peores distribuciones del ingreso del mundo (PNUD, 2003), lo que en términos concretos establece que *“los hogares pertenecientes al décil más pobre tienen un ingreso promedio de \$56.312, en comparación a los más de 2 millones percibidos por el 10% de los hogares más ricos. Aún más, en términos per cápita, casi el 70% de la población chilena cuenta con menos de \$100.000 para sus gastos personales”* (Fundación Terram, 2003). La instalación de la desigualdad en el debate público en el 2003 coincide con la conmemoración de 30 años del golpe militar de 1973, hechos que comentamos a continuación.

IV. A 30 AÑOS DEL GOLPE: LA REACTIVACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA COMO CRÍTICA DEL PRESENTE.

Durante el 2003, la escandalosa desigualdad es uno de las temáticas en que se concentra el debate público. Por otro lado, se conmemoran 30 años del golpe militar y son muchos los esfuerzos conscientes por entroncarse con el pasado colectivo. Uno de los efectos notables de este ejercicio, sucede con la confluencia de diversos grupos y personas que emiten un discurso que revaloriza el gobierno de la Unidad Popular. Es cierto que siempre existieron grupos políticos que reivindicaron el gobierno de Allende, pero como nunca después del golpe militar, estos grupos tuvieron la posibilidad de ocupar la tribuna pública para manifestarlo y tener una adhesión significativa.

Como preludio de esta situación, Augusto Pinochet, durante su detención en Londres en 1998, publica una misiva que titula “Carta a los chilenos” en la que justifica la violación a los DDHH en el contexto de la “guerra fría” y la existencia de un enemigo interno que propagaba la ideología marxista leninista⁵. Sus efectos fueron significativos. Si hacia 1994 la desmovilización social era evidente, durante 1998 sucede un cambio en la subjetividad de actores sociales y políticos, hasta entonces signada por el fatalismo del discurso sobre el “fin de la historia”, que en su versión chilena se encarnaba en la política de los consensos y la defensa de un sistema económico que reduce las relaciones sociales a sus vínculos con el mercado. Con la detención de Pinochet en Londres se asume que la justicia era posible, que podía ser juzgado y junto con él todo lo heredado de su régimen.

En 1999 se publica *Manifiesto de los Historiadores*⁶, texto que refuta la interpretación de la historia reciente de Chile hecha tanto por Pinochet en su “Carta a los chilenos”, como lo escrito en los *Fascículos de Historia de Chile* por Gonzalo Vial -publicados por el vespertino La Segunda-. Esta situación marca un hito en la “batalla por la memoria” (Illanes, 2002), es decir, “*la disputa por la memoria que aún se libra en Chile respecto de las últimas décadas de la historia nacional*” (Grez, 2005, p.1), y que se desarrolla en territorios dominados por la ideología neoliberal y su “eterno presente” caracterizada por neutralizar toda referencia a una memoria colectiva y provocar la “*incapacidad casi patológica de los individuos por proyectarse hacia el futuro más allá de su rol como consumidores*” (Grez, 2005, p.3).

Llegado el 2003 no había censura posible contra la “*necesidad social de redescubrir el pasado colectivo*” (Grez, 2005, p.3); el cual, no puede ser más el relato de “*un pasado muerto que ya no guarda comparación alguna con las preocupaciones actuales, sino una trama donde la relación entre el presente y el pasado es muy activa*” (Grez, 2005, p.3). En

⁵ En otra de sus cartas, Pinochet repite sus argumentos indicando que dado los hechos hubo que “*actuar con el máximo rigor y sostenidamente hasta conjurar cualquier extensión del conflicto que se anunciaba*” y dadas las “*características del contrincante, fue preciso emplear diversos procedimientos de control militar, como reclusión transitoria, exilios autorizados, fusilamientos con juicio militar*”. El Mercurio, 24 de diciembre de 2006.

⁶ Publicado en 1999 es firmado por los historiadores Mario Garcés, Sergio Grez, María Eugenia Horvitz, María Angélica Illanes, Leonardo León Solís, Pedro Milos, Julionto Vallejos, Armando de Ramón Folch, Jorge Rojas, Gabriel Salazar y Verónica Valdivia.

efecto, si bien hacia el 2003 persiste el consenso político y los movimientos sociales aún se encontraban en posiciones defensivas, la idea de un modelo económico exitoso para todos, era una cuestión insostenible (Schatan, 2003). La crisis de la economía neoliberal coreaba la crisis de la sociedad de mercado, donde la ley de la oferta y la demanda aseguraba la integración y cohesión social sólo a un segmento de la población mientras las mayorías subsistían entre la vulnerabilidad social y la pobreza.

Con el debate abierto desde la historiografía, comienza la resignificación -en particular de la Unidad Popular⁷- de nuestro proceso histórico reciente, lo que además permite, desmitificar la idea de que no existe otra cosa que la economía neoliberal y la política de los consensos y que fuera de sus límites sólo existe la ingobernabilidad y el subdesarrollo.

Pero la situación en la clase política no fue la misma. Los partidos políticos, en particular el Partido Socialista, se encargaron de desplegar una estrategia comunicacional en torno al “nunca más” que, más que desechar la violencia como forma de acción política, significaba el cierre al socialismo tal como se entendió hasta el gobierno de la Unidad Popular, mientras que desde la derecha el “nunca más”, mucho más ambiguo, se expresaba sin una autocrítica ni arrepentimiento por la responsabilidad acaecida por el asesinato, la tortura, el exilio y la desaparición, refugiándose en una espuria apelación al “contexto histórico” como justificación de lo sucedido.

En contraste con esta iniciativa de los partidos políticos, se producen cientos de actividades a lo largo de todo el país organizadas en sindicatos, liceos, universidades, poblaciones y comités que buscan recuperar la memoria de lo acontecido durante el

⁷ La recuperación de símbolos como la figura de Allende con las actividades de celebración del centenario de su natalicio durante el 2008, permitió a muchos chilenos y chilenas salir del derrotismo y la desilusión, sin caer en la autocomplacencia y desplegando la crítica respecto de la experiencia de ampliación de la participación popular y sus organizaciones políticas durante el gobierno de la Unidad Popular. Como ejemplo véase la carta de Felipe Jeldres, militante socialista, expresidente del Instituto Nacional en al Revista Masiva, http://www.revistamasiva.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=112.

Véase también http://www.bibliotecaobrera.cl/wpcontent/uploads/2009/04/guia_metodologica_recreando_el_pasado.pdf

gobierno de la Unidad Popular, resignificando disposiciones como: el medio litro de leche como una política de seguridad alimentaria; la nacionalización del cobre como el “sueldo de Chile”; y la creación de la Editorial Nacional Quimantú (Tacep, 2003) para el fomento de la lectura como ejemplo de la iniciativa por en contraste con la situación de la educación y la cultura bajo la economía de mercado⁸.

Otro hecho significativo sucede el 2003. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convoca para agosto su tradicional movilización que, presentada como una gran movilización, *“terminaba frecuentemente en alguna concentración débilmente trabajada que apenas expresaba al activo político-social, y no al mundo de los trabajadores en su mayoría”* (Tacep, 2003, p.10). El curso normal de la cita, se vio alterada por el llamado a Protesta Social para el 13 de agosto por parte de una coordinación en la que inicialmente se observa a la Central Autónoma de Trabajadores (CAT), la Confederación de Sindicatos de Maipú-Cerrillos (CONFESIMA vinculada al FPMR), la Confederación de Sindicatos de la Empresa Privada (CONSIEP) y el Sindicato Nacional Telefónico (SINATE), sumándose luego, el Movimiento Sindical por los Cambios (MOSICAM), la organización político-sindical Colectivos de Trabajadores (CCTT), un sector de Fuerza Social y Democrática, la Corriente Sindical Clasista y una diversidad de colectivos estudiantiles y poblacionales, como por ejemplo, el Zonal Poniente de Pobladores (Tacep, 2003).

A partir de las coordinaciones realizadas por estas organizaciones en agosto de 2003, parte del movimiento antisistémico⁹ chileno comienza a tener expresión orgánica con la conformación de la Coordinadora por la Protesta Social. Dentro de su convocatoria se observan reivindicaciones como la *“dignidad de trabajo, por salarios justos; por seguridad social para todos; por el derecho a la salud; por educación gratuita; por una democracia participativa, por un Chile justo y solidario; por los derechos del pueblo; por los Derechos*

⁸ El estudio “Chile y los libros: Índice de lectura y compra de libros” realizado por Fundación La Fuente de la empresa Adimark y financiada por La Tercera indica que cerca del 45% de los adultos reconoce no leer nunca libros, mientras el 72% de los hogares chilenos no compra nunca libros. El 71% de los llamados lectores frecuentes afirma que leería más si los libros no tuvieran IVA.

⁹ Los movimientos antisistémicos se definen como movimientos sociales que operan en oposición y relación a la lógica central de la economía-mundo capitalista –la acumulación interminable de capital- desde mediados del siglo XIX (Arrighi, Hopkins, T.K. y Wallerstein, 1999).

Humanos; por viviendas dignas; por el respeto a las minorías; por la dignidad de nuestro pueblo” (Illanes, 2003, p.452).

En este llamado a la protesta social, el paro y la protesta constituyen dos formas de acción directa que marcarán tendencias en el desarrollo del movimiento antisistémico del 2003. Estas tendencias se hará nuevamente visibles en la organización de las movilizaciones del 2004 con motivo de la realización del Foro Apec en Santiago de Chile: El Foro Social Chileno –en la que participan organizaciones como la ANEF y la CUT que siguiendo el lineamiento del altermundismo del Foro Social Mundial (FSM) -exclamando que ¡Otro Mundo Es Posible!- realizará una amplia convocatoria para la movilización social pacífica durante la realización del Foro mediante un acto político-cultural en el Parque Bustamante- y la Coordinadora Anti-Apec –conformada por al menos 60 organizaciones sindicales, sociales y políticas que dentro de sus acciones hace un llamado insurgente al “copamiento” de Santiago- y de la cual surgirá la Coordinadora por la Protesta Popular y que actuará al menos hasta el 2007.

V. CONCLUSIONES

En suma, a treinta años del golpe militar, en un contexto en que se activa la crítica a la economía neoliberal y se desvanece el exitismo de los “jaguares” chilenos, nos encontramos con un proceso de reconstrucción de la herencia del gobierno de Allende y una incipiente recomposición del movimiento antisistémico chileno producto de un nuevo estado de ánimo de la ciudadanía que se pronuncia, si no en un cambio en la correlación de fuerzas, sí en una mayor conciencia democrática expresada en reivindicaciones, demanda de derechos y exigencias de mayor participación e igualdad.

La crisis asiática es el punto de partida en que la ideología liberal comienza a perder la hegemonía. La idea de individuos privados y aislados que persiguen sus intereses con una interferencia mínima del Estado permiten mayores beneficios para la sociedad en su conjunto, comienza a ser puesta en entredicho por la precarización del trabajo, pérdida de

calidad de los bienes y servicios que presta el Estado y el encarecimiento de los privatizados, los atropellos generados por la desregulación y, principalmente, la desigualdad y la injusticia social, comienzan a erosionar la fe en el orden existente.

Con este panorama se encuentra la conmemoración de los 30 años del golpe militar. Las múltiples actividades que promueven la reflexividad y la memoria sobre lo que somos y lo que fuimos, lo que hemos hecho y lo que hicimos como país, desnudaron nuestros antagonismos y contradicciones evidenciando que las políticas del consenso y la precaria legitimidad de la institucionalidad heredada, más la escandalosa desigualdad e injusticia social, no nos permiten como colectivo plantearnos la proyección hacia el futuro sin que aparezca el fantasma de la fractura, el caos y la violencia.

Sin embargo, este ejercicio de memoria histórica permitió la resignificación del pasado, la crítica del presente y aportó a la construcción de una opción de futuro. En efecto, el llamado a protesta social del 2003 constituyó el punto desde el cual emerge un incipiente y nuevo movimiento social contra los dictámenes de la economía neoliberal. Si hasta 1998 la economía tiene contra las cuerdas a la sociedad, a partir del 2003, la economía irá perdiendo terreno frente a la ofensiva de la sociedad que reclama una democracia substantiva y participativa más que una formal y procedimental centrada en la elección de representantes.

Esta situación, en el contexto de un sistema político autoritario, cerrado, autorreferente y desvinculado de las bases sociales ha denotado una crisis de la política como resultado de una *“mezcla de política de los arreglos –los mal llamados consensos-, de enfrentamientos entre actores sin proyectos por cuotas de poder y de soluciones parches que arrastran los problemas hasta que se presentan otros”* (Garretón, 2004, p.4), siendo incapaz de constituirse en un espacio que *“genere las condiciones para que la gente y los actores sociales resuelvan sus propios problemas”* (Garretón, 2004, p.18).

El coctel que se nos presenta no es para nada alentador para la paz social. Por un

lado, dentro de la esfera económica se observa un crecimiento económico con una marcada desigualdad en la distribución de las riquezas e ingresos y una concentración de la propiedad; en la dimensión social, la desigualdad provoca pobreza, vulnerabilidad y fragmentación social; mientras que en el ámbito político, el Estado recibe cada vez mayores exigencias de derechos, protección social y participación.

Estas contradicciones en la hondura de la sociedad chilena reflejan no sólo el agotamiento de un modelo económico, sino que una crisis de la sociedad de mercado que se devela en fenómenos como el aumento de la violencia y la criminalidad. Ciertamente que las políticas sociales con su tendencia a asegurar derechos han sido un giro dentro de los gobiernos de la Concertación como el Plan Auge y la conservadora reforma al sistema de pensiones –que no toca el sistema de capitalización individual, ni sectores medios o mujeres- que establece una pensión básica, sin embargo, han sido reformas que no han cambiado substantivamente el estado de cosas.

Por el contrario, durante los últimos años han emergido movimientos sociales que han radicalizado la protesta contra el régimen y que dan cuenta del mencionado cambio en la correlación de fuerzas¹⁰. Primero, las huelgas de los trabajadores subcontractados del cobre lideradas por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), las protestas de los trabajadores salmoneros y las protestas estudiantiles del 2006 al 2008 que actualmente dirigen la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Universitarios y Secundarios (ACEUS) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Populares. Estos movimientos reflejan un rechazo a la hegemonía neoliberal y una demanda de transformación substancial en la situación política y social del país, asumiendo la voluntad de constituirse en sujetos de cambio social.

La transformación social depende en gran medida de los sectores movilizandos; sin embargo, en el desarrollo de los movimientos se desarrollen irán surgiendo contradicciones

¹⁰ Un caso importante pero que no se incluye es el movimiento mapuche, que con una estrategia similar a la de otros movimientos sociales rurales como el Movimiento de trabajadores Sin Tierra (MST), han desarrollado la táctica de “ocupación, negociación y producción” de tierras agrícolas enfrentándose con empresas forestales, mineras y el Estado de Chile. Véase “*Choque/Lleu Leu declara reivindicación territorial*” declaración firmada por la Comunidad Mapuche de Choque/Lleu Leu y la Coordinadora Mapuche de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), en Periódico “El Ciudadano”, Año IV, N° 58.

ideológicas y políticas, tácticas y estratégicas, así como problemas prácticos que será necesario ir resolviendo en el camino, en particular en lo referido a los límites, tanto de la negociación de la revuelta para la consecución de sus objetivos de cambio social. ■

BIBLIOGRAFÍA

- Arrighi, G., Hopkins, T. K., Wallerstein, I. (1999). *Movimientos antisistémicos*, Ediciones Akal, Barcelona.
- Larraín, F. (2008). *Cuatro millones de pobres en Chile: actualizando la línea de pobreza*”, Estudios Públicos, 109, p.101-148.
- Lechner, N. (1996). *La política ya no es lo que fue*. Revista Nueva Sociedad Nro. 144 Julio-Agosto, Caracas.
- Lechner, N. (1990). *El desafío de la democracia latinoamericana*, Leviatán, Revista de hechos e ideas, 41, otoño 1990.
- Fundación Terram (2003). *Análisis de Coyuntura Social*. Fundación Terram, Santiago de Chile.
- Garretón, M. (2004). *La calidad de la política en Chile*, Colección Ideas, Año 5, n° 42, Mayo de 2004, Santiago de Chile.
- Gaudillat, P. y Mouterde, P. (1998). *Los movimientos sociales en Chile 1973-1993*. Ediciones Lom, Santiago de Chile.
- Goicovic, I (2006). *La refundación del capitalismo y la transición política en Chile (1973-2004)*.
- Grez, S. (2005). *Historiografía y Memoria en Chile. Algunas consideraciones a partir del Manifiesto de Historiadores*.
- Illanes, M. A. (2002). *La batalla de la memoria: ensayos históricos de nuestro siglo, 1900-2000*, Editorial Planeta, Santiago de Chile.
- Salazar, G. y Pinto J. (2006). *Violencia política popular en las grandes alamedas*, Ediciones Lom, Santiago de Chile.
- Salazar, G. y Pinto J. (1999). *Historia de Chile, Vol. I*. Ediciones Lom, Santiago de Chile.
- Salazar, G. y Pinto J. (1999). *Historia de Chile, Vol. I*. Ediciones Lom, Santiago de Chile.

- Schatan, J. (2003). *Distribución del ingreso y pobreza en Chile*, Centro de Estudios de Desarrollo Alternativo, Santiago de Chile.
- Solimano, A., y Pollack, M. (2006). *La mesa coja. Prosperidad y desigualdad en el Chile democrático*, Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), Santiago de Chile.
- Taller de Análisis de Coyuntura Económica y Política (TACEP). *Informe de Coyuntura Trimestral. Cuarto Informe, Periodo Agosto-October de 2003*. Santiago de Chile.
- Vitale. L (2001). *Las clases sociales de Chile a principios del nuevo siglo XXI*.



Revista Encrucijada Americana. Año 2. N° 2. Primavera-Verano 2008

Universidad Alberto Hurtado

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Cienfuegos 46 "A", 2° Piso, Santiago, Chile. Teléfono (56-2) 889 7476.

Email: america@uahurtado.cl